



# Alerta por el posible cierre de residencias tras el Covid-19

● Las privadas temen la quiebra si el Govern no compensa la caída de ingresos ● Instan a la Generalitat a pagar las plazas vacantes

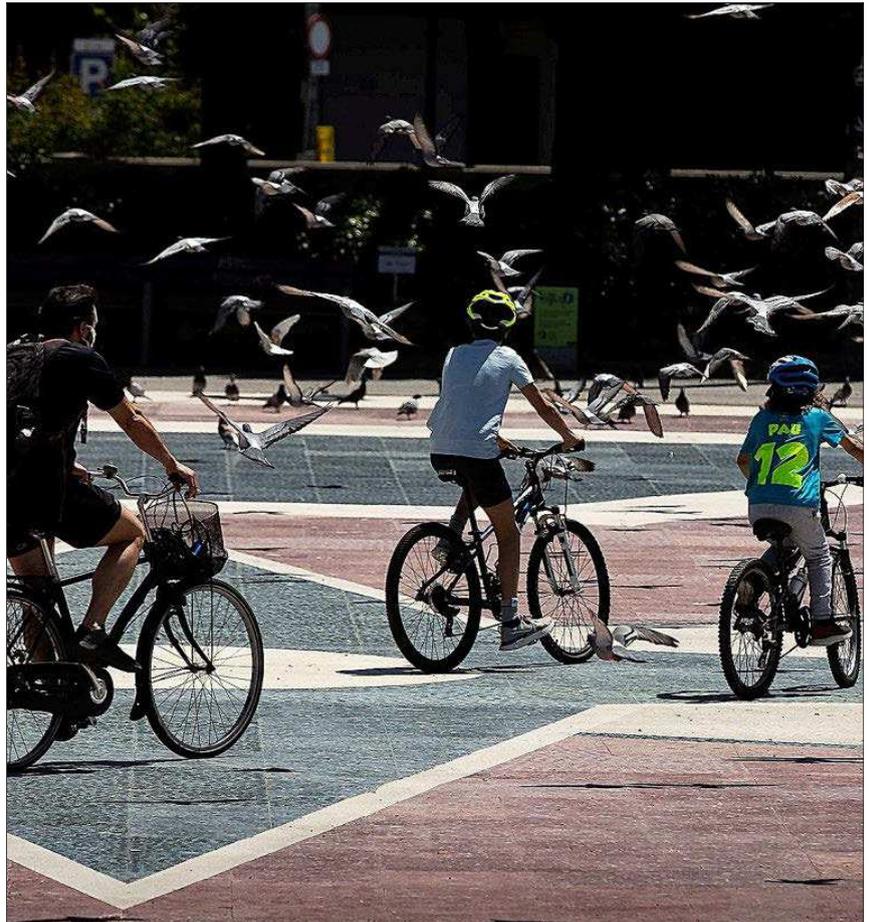
JORDI RIBALAYGUE BARCELONA

La rutina de los geriátricos se ha alterado para tratar de contener el coronavirus, que ha causado más de 2.800 muertes y más de 10.300 contagios confirmados en asilos catalanes. Desde el 13 de marzo se prohíben nuevos ingresos en las residencias de ancianos de la comunidad y el Gobierno las ha incluido en los servicios esenciales, sin opción a reducir actividad ni personal durante la alarma sanitaria. A la vez que intentan protegerse de la enfermedad, los centros privados se quejan de que la Generalitat no les compense por la caída de la recaudación con la que se sustentan. La merma la provoca las vacantes que deben quedar sin cubrir para evitar riesgo de infección. La patronal mayoritaria del sector en Cataluña reclama paliativos a la Generalitat para revertir «una situación financiera irrecuperable, que desemboque en el cierre» de centros una vez que la pandemia se atenúe.

En una instancia al Departamento de Salud, la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) advierte de un trato «desigual» respecto a las plazas públicas, a las que el Govern resarce mientras siguen vacías. La Generalitat asume el coste total de las camas concertadas en establecimientos privados o las cedidas por recintos colaboradores que hayan quedado libres por fallecimiento o ausencia voluntaria del residente desde el 12 de marzo. También abona un 40% de las plazas desocupadas a las que se asocia una prestación económica vinculada. «Me encuentro con que hay que mantener la plantilla como si el centro estuviera al 100% pero no me entra dinero para pagar», asegura la directora de una pequeña residencia de una localidad barcelonesa con una renta por hogar inferior a la media catalana. Durante una década ha procurado sin suerte que la Generalitat concertara alguna de sus 21 plazas, de las que cuatro están libres, ninguna por muerte por coronavirus, del que no han registrado casos. «Es un desgaste brutal. No sabes por dónde te puede entrar», siente la directora, que pide anonimato. «No puedo decir a un empleado que haga dos horas y a otro dos más porque, cuanta más

gente entra y sale, más posibilidades hay de contagio. Tengo familias que quieren traer a sus mayores aun en esta situación. No pueden cuidarlos porque sufren altas dependencias o demencias avanzadas y lo pasan muy mal en casa», explica.

El Govern justifica que no retribuya los alojamientos privados vacíos bajo la epidemia porque «no han recibido nunca financiación pública». La patronal contrapone que se les debería equiparar durante la pandemia con las que perciben fondos de la administración para prevenir una «fallida irreversible» de las camas prestadas por empresas, el 21,7% de las existentes en Cataluña. «Cuando se supere lo más grave de la crisis sanitaria, puede no haber disponibilidad suficiente de plazas para dar respuesta a la demanda», alerta ACRA. De las 57.383 plazas para ancianos en la región, la Generalitat y los ayuntamientos son titulares de 10.269 y 12.468 son privadas sin cobertura. El resto se apunala con dinero público. «Tienen las mismas obligaciones pero no los mismos derechos», piensa la directora general de ACRA, Montse Llopis. Con la prioridad enfocada en contrarrestar al virus, Llopis avisa del peligro de colapso: «Las cuentas de explotación de las residencias están pensadas en tenerlas llenas, porque normalmente lo están. Es inviable si bajan los ingresos y no están llenas pero se mantienen los gastos». Mientras perdure la excepcionalidad, ACRA propone a Salud que se permita acoger a nuevos residentes si han superado una prueba PCR con resultado negativo y abonar el precio de los huecos en los geriátricos privados y los aproveche trasladando a ancianos hospedados en otros. «La Generalitat dispondría de plazas que necesita para personas sin Covid-19 en un centro que no tiene», aduce Llopis. La entidad pide al Govern que sufrague las vacantes en centros privados durante la alarma al igual que las que sí que costea. De no alcanzar un acuerdo, la patronal podría tramitar un Erte sobre parte de los asilos. «Quiero que la residencia funcione, no despedir a mis trabajadores y seguir trabajando. Nos vemos desamparados», afirma la directora.



Un grupo de personas montan en bicicleta por la plaza de Catalunya de Barcelona este martes. ENRIC FONTCOBERTA/EFE